

EDITORIAL

LAS ELECCIONES DE 1985 ¿UN PASO ADELANTE EN EL PROCESO DE DEMOCRATIZACION?

Las elecciones de marzo de 1985 que ponían en juego todos los diputados de la asamblea legislativa y todas las autoridades municipales tienen dos características importantes. Por un lado, culmina en ellas un proceso electoral que pretende conducir a una normalidad democrática en la cual los puestos constitucionalmente elegibles sean efectivamente electos por voto popular directo; por otro lado, abren un período no electoral de tres años que permite concentrarse en acciones reales de gobierno sin distracciones electoralistas. Desde este doble punto de vista tienen una cierta importancia que no sería objetivo desmerecer ni disminuir. La asamblea legislativa sabe que cuenta con tres años para desempeñar sus funciones y el poder municipal sabe también que cuenta con tres años para cumplir con sus obligaciones.

¿Supone esto una novedad sustancial en el proceso de democratización y de pacificación del país, en el proceso de normalización? La respuesta no puede ser simple, porque aunque desde un punto de vista de formalidad democrática sí lo suponga, desde un punto de vista de realidad democrática no es sin más obvio que lo haga. La razón de ello es que este último evento electoral no es más que un pequeño paso en el proceso que se inició con las elecciones de 1982 y que se continuó con las del 84. No es en sí mismo una ruptura ni tampoco un salto cualitativo, aunque sí represente una acumulación y consolidación que no pueden considerarse insignificantes desde una perspectiva política.

Para desentrañar el significado y la importancia de estas elecciones más allá de las calificaciones entusiastas o de las descalificaciones sistemáticas es necesario hacer algunas reflexiones

La farsa electoral radica en que las elecciones no dan el poder real a los gobernantes, legisladores y concejos municipales porque hoy ese poder está muy compartido con la Fuerza Armada y sobre todo con la Casa Blanca.

que continúen las que esta revista ha hecho con ocasión de los comicios anteriores, con los cuales los acabados de realizar tienen perfecta continuidad, no en sus resultados, pero sí en su estructura.

La primera de ellas tiene que ver con la importancia real de los procesos electorales en El Salvador y específicamente del que se ha venido desarrollando desde 1982 y ha culminado en 1985. Su importancia mayor está en servir de justificación al proyecto político hoy imperante en el país; se supone, sobre todo en el exterior, que el grado mayor o menor de democracia se mide fundamentalmente a través de procesos electorales pautados por la ley, porque ese sería el mejor mecanismo de expresión y participación popular. Así tendríamos que una masiva asistencia de la población a los comicios implicaría una masiva aprobación al esquema político dentro del cual se dan las elecciones y que la masiva aprobación de una de las alternativas en disputa implicaría asimismo una masiva aprobación del proyecto político triunfador, del proyecto político respaldado por el partido vencedor. Si esos dos presupuestos se dan como evidentes —y este es el caso de cuantos se aferran a las elecciones para justificar decisiones que no han surgido de la voluntad popular, sino de intereses muy definidos—, se dará también como evidente que en 1985 culmina la justificación no del proyecto que se inició el 15 de octubre de 1979, sino el proyecto que iniciaron en enero de 1980 la Fuerza Armada y la democracia cristiana y que fue asumido y reorientado por la administración norteamericana. Tendríamos que más de un millón de salvadoreños adultos, a pesar de sus diferencias partidarias, estarían de acuerdo con ese proyecto, no tanto en lo que ya ha dado de sí, sino en lo que puede ir dando, a falta de otro proyecto más realista y efectivo.

Hay que conceder que con el proceso electoral que se ha venido dando en El Salvador sí se ha conseguido esa imagen. Observadores internacionales de las elecciones, un buen número de gobiernos y, desde luego, la administración Reagan encuentran en el proceso electoral salvadoreño suficientes pretextos para hablar de un proceso democrático que debe ser apoyado y al mismo tiempo defendido contra todos aquellos que lo combatan. Esta imagen no es del todo irreal, pero no por eso puede decirse que refleje fielmente o siquiera suficientemente toda la realidad. Más de un millón de salvadoreños han entrado de buena voluntad en el juego electoral no tanto forzados por el temor sino más bien esperanzados de que su contribución en las urnas pueda servir para que las cosas marchen un poco mejor. Ciertamente ha habido un sensible descenso de votos válidos res-



pecto de las últimas elecciones (23.7 por ciento menos), lo cual podría interpretarse como desaliento ante el proceso electoral, aunque sería simplista en este caso reducirse a esa sola explicación, pero aún el número de los votantes es alto y significativo.

Si pasamos de la imagen a la realidad, las cosas cambian un tanto. ¿Queda justificado por las elecciones el proyecto político último que rige actualmente los destinos de El Salvador o solamente queda justificado el que deban darse todos los pasos posibles para acabar cuanto antes con la guerra y con la penuria económica que asuelan al país? Más bien es lo segundo que lo primero.

Efectivamente, el proyecto político último determinado fundamentalmente por la voluntad de la administración Reagan es el de terminar cuanto antes, a través principalmente de la guerra, con la oposición del FMLN-FDR para que El Salvador, lejos de poner en peligro la llamada seguridad de Estados Unidos, se convierta cada vez más en un servidor de la misma. Esto no lo conocen reflejamente los electores y, consecuentemente, no es esto lo que justifican con sus votos, al menos una gran parte de ellos, los que no son de ARENA, PAISA o PPS, que han sido con el PCN los partidos perdedores en estas elecciones. Pero es que, además, todo tipo de encuestas da como resultado que la mayor parte de la población ni cree ni acepta que la solución militar sea la mejor para el país, antes al contrario, piensa que un diálogo con el FMLN-FDR sería el medio más adecuado para traer la más pronta y mejor solución a los problemas de El Salvador. No es débil prueba de ello que inesperadamente haya sacado más del 50 por ciento de votos el partido que, al menos en teoría y en la propa-

ganda, está más cerca del diálogo por haberlo ya iniciado y por haber hecho de él, aunque con cautela y temor, uno de los elementos principales de la gestión gubernamental.

Si del planteamiento imagen-realidad pasamos a la verificación de la importancia del proceso electoral en términos de poder real, las cosas se complican aún más. Lo que pudiera estimarse como farsa electoral no consiste en que las elecciones hayan sido fraudulentas, sino que las elecciones no dan el poder real a los gobernantes, legisladores y concejos municipales, sobre todo a los dos grupos primeros. Efectivamente, la constitución atribuye al presidente de la república, a la Asamblea Legislativa y a los otros poderes del Estado unas obligaciones y derechos de gran envergadura, sustentados unas y otros en la voluntad popular expresada libremente en elecciones. Ciertamente este poder no es ilimitado por cuanto tiene sus fronteras en la constitución y asimismo en el juego democrático de las distintas fuerzas sociales, que ejercen su propio poder conforme a las leyes de la república.

Pero es que en el caso de El Salvador el poder del ejecutivo y del legislativo están grandemente debilitados, hasta el punto de que dista mucho del que se tendría que ejercer conforme al mandato constitucional y a la voluntad del electorado. No sólo el poder económico y social no está en sus manos, sino que no está en sus manos el poder estatal mismo, el poder que la constitución atribuye al órgano ejecutivo y legislativo. Ese poder está hoy muy compartido en las cosas más fundamentales con la Fuerza Armada y, sobre todo, con la Casa Blanca. El poder que reciben de un triunfo electoral los partidos vencedores en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, etc., no lo reciben los partidos vencedores en El Salvador. En eso radica la farsa electoral. Las elecciones dan algún poder, pero no dan el poder que la constitución atribuye a los depositarios de la voluntad popular. Se ha avanzado en disminuir el fraude, en no dar a los perdedores el puesto de los ganadores —casos de 1972 y 1977—, pero poco se ha avanzado en dar a los ganadores el poder que convencionalmente los votos debieran dar en la conducción de los asuntos del Estado. A pesar de que el Partido Demócrata Cristiano se ha mostrado sin fisuras en torno al presidente Duarte, de quien ha hecho en estas elecciones su indiscutible jefe carismático, no por eso ha alcanzado la capacidad efectiva para hegemonizar ni siquiera para vanguardizar el proceso político. En el interior, la Fuerza Armada, que no quiere abandonar no sólo su autonomía como institución cerrada dentro del Estado, pero ni siquiera su capacidad de decisión última tanto en las cuestiones de la guerra como incluso en las cuestiones políticas, y en el exterior, la presencia norteamericana avalada por cientos de millones de dólares

Más de un millón de salvadoreños adultos estarían de acuerdo con el proyecto que en 1980 iniciaron la Fuerza Armada y la democracia cristiana por lo que puede ir dando de sí, a falta de otro proyecto más realista.

en ayuda militar y financiera, que busca llevar adelante su proyecto centroamericano por encima de los intereses de cada uno de los pueblos centroamericanos, son obstáculos de momento insalvables para el poder político que teóricamente está en la presidencia de la república y en la asamblea legislativa.

No obstante, el mero hecho de tener la presidencia y de haber adquirido en estas elecciones una sólida mayoría en la asamblea da un cierto poder. No el poder que la constitución exige, pero sí un poder de cierta envergadura. Desde luego para muchos aspectos de la gestión pública que no dicen relación directa con la marcha de la guerra y con las pretensiones norteamericanas sobre la zona. Podrán darse y ejecutarse medidas de alguna importancia en lo económico, aunque limitadas éstas por la fuerza real de la empresa privada; con mayor razón podrán darse y ejecutarse medidas en otros muchos campos que no ponen en crisis directamente los grandes intereses establecidos: en la educación, en la cultura, en la atención sanitaria, en el desarrollo de obras públicas, etc. Pero también se ha aumentado el poder del actual gobierno para dar pequeños pasos en lo que son puntos neurálgicos del acontecer nacional. El presidente Duarte está ahora en mejores condiciones para avanzar en la democratización del ejército, entendida ésta como sumisión constitucional de la Fuerza Armada al poder político elegido por el pueblo; para avanzar consecuentemente en que se respeten los derechos humanos tanto en la conducción de la guerra como en la actuación de los cuerpos de seguridad; para acabar con los escuadrones de la muerte y exigir responsabilidades judiciales a quienes les dieron vida y los sustentan; sobre todo, para hacer avanzar el proceso de diálogo de manera que sea razonable el regreso a la lucha política de quienes ahora ven y siguen viendo justificada la lucha armada.

¿En cuanto ha aumentado este poder? No en mucho, pero ha aumentado. No en mucho, porque, como venimos diciendo, el poder real no lo dan en El Salvador los votos, ni siquiera los municipios, por lo que los 33 diputados en vez de los 24 anteriores o el 75 por ciento de las alcaldías, incluidas las de 10 cabeceras departamentales, no suponen ningún salto cualitativo. No ha aumentado, pues, en proporción a lo que representa el triunfo electoral, pero ha aumentado en cuanto ha debilitado a sus enemigos y en cuanto ha adquirido nuevas posiciones desde las cuales actuar. Entre estas nuevas posiciones hay que considerar la autoridad moral adquirida para hablar frente a sus opositores y frente a la Fuerza Armada en razón de la mayoría conseguida, pero están también las posiciones que implican 33 diputados en la asamblea y más de 150 alcaldías, que robustecen y activan mucho al partido y, consiguientemente, lo pueden fortalecer a la hora de la organización y de la movilización popular. Si algo han demostrado las elecciones pasadas es la capacidad partidista de la democracia cristiana; lo que no había demostrdo co-

mo gobierno lo demostró como partido a la hora de capitalizar votos. Pero el punto principal de su aumento de poder está en el triunfo inesperado sobre sus opositores coaligados. Veamos por qué.

» El pueblo ha castigado con su voto a la coalición de derecha. Ciertamente ARENA no ha perdido en el porcentaje de votos válidos (29,76 por ciento en 1984; 29.78 por ciento en 1985), pero sí ha perdido votos (376.917 en 1984; 282,292 en 1985). Este no poder avanzar sobre todo si se considera la poco brillante gestión gubernamental y la incapacidad de derrotar al PDC aun aliándose con el PCN en busca de diputados y con el PCN y PAISA en la disputa de la alcaldía de San Salvador, implica un claro rechazo popular de las posiciones de (extrema) derecha. La gran empresa privada que hegemoniza ANEP y tiene junto con ARENA su órgano de expresión en El Diario de Hoy, a pesar de haber utilizado todo su poder organizativo y



Pero Duarte está ahora en mejores condiciones para avanzar la democratización del ejército, el respeto a los derechos humanos, acabar con los escuadrones de la muerte y promover el diálogo.

propagandístico en derrotar la posición centrista de Duarte, no lo ha conseguido, aun cuando se esperaba que esto fuera fácil, tenidos en cuenta los resultados de las últimas elecciones. No sólo le ha fallado a la extrema derecha la estrategia política, sino lo que es más grave, el conocimiento de lo que va siendo la voluntad popular. Si algo está claro tras estas elecciones es que entre el proyecto derechista de ARENA-PCN y el centrista de Duarte, la mayor parte del pueblo salvadoreño está contra aquél y en favor de éste. Con ello no se ha logrado mucho porque las maniobras de acción pueden ir por caminos no democráticos, pero al menos se ha arrebatado el pretexto ideológico al proyecto arenista que apela incesantemente al sentir nacionalista del verdadero pueblo salvadoreño y que envenena la conciencia del ejército con el fantasma del anticomunismo.

Pudiera pensarse incluso que la Fuerza Armada se está separando paulatinamente del papel que la quiere hacer desempeñar el poder económico que la ha controlado en el pasado. Cuando ARENA en su desesperación quiso exigir la anulación de las elecciones, toda la cúpula militar le vino a exigir que desistiera de tan alocada aventura. Esto significa al menos que no se da una subordinación en cualquier caso, ni siquiera en éste que podría suponer un fracaso para los que dicen ser sus mejores aliados y defensores y que podría favorecer una apertura a la izquierda que se supondría no deseada por los militares. Ciertamente el ministro de defensa habló de que había una comunidad fundamental entre todos los partidos, pues el único adversario común era la subversión con la cual había que terminar por medio de las armas. Pero, por otro lado, esta presentación solemne en público suponía un respaldo al orden constitucional formal ya no sólo retórico, sino efectivo, al menos de momento. Un pequeño paso, pero un paso adelante. Se ha abierto con él un margen mayor de maniobra para Duarte y su gobierno. Este margen no permite, sin embargo, recortar el abuso institucionalizado de la autonomía militar y el abuso ocasional de la injerencia militar en los asuntos del Estado. Y en ello, junto con el intervencionismo masivo de Estados Unidos en los problemas internos de El Salvador, está la gran dificultad para acometer acciones reales de democratización en los puntos fundamentales en que se requieren.

En la coyuntura actual esos puntos fundamentales son cuatro. Primero, si la solución buscada va a ser predominantemente política o predominantemente militar; segundo, si mientras la guerra constituye el elemento principal de la estrategia, va a ser conducida según los requerimientos constituciona-

El pueblo ha castigado con su voto a la coalición de derecha la cual ha desconocido a la voluntad popular y le ha arrebatado el pretexto ideológico que apela incesantemente al sentir nacionalista del verdadero pueblo salvadoreño y que envenena la conciencia del ejército con el fantasma del anticomunismo.

les y las exigencias humanitarias; tercero, si se van a tomar las medidas adecuadas al menos para que en el presente y en el futuro no se perpetren violaciones de los derechos humanos; cuarto, si se va a debilitar efectivamente el poder del capital oligárquico a la par que se robustece la capacidad económica de la pequeña empresa y del sector cooperativista, mientras se distribuye equitativamente el costo de la guerra. La propaganda electoral de la democracia cristiana parecería indicar que la solución debiera ser realmente más política que militar, de modo que en ella intervendrían más los políticos que los militares, más las negociaciones que las armas; parecería indicar que la guerra iba a quedar regulada y vigilada por las decisiones del presidente de la república y no por sus subordinados militares o por los asesores norteamericanos; parecería indicar que en poco tiempo se iba a resolver la violación de los derechos humanos y que, incluso, podrían ser castigados los máximos responsables de la misma; parecería finalmente que se propone debilitar a los sectores oligárquicos y robustecer a los sectores populares. Pues bien, ya ha llegado el momento de cumplir con los propósitos anunciados. No es fácil, no puede ser de un día para otro, pero tiene que verse pronto la firmeza de la decisión a través de resultados comprobables.

¿Tiene el presidente Duarte voluntad eficaz de conseguir todo ello? ¿O su interés principal es, como tantas veces ha dicho, terminar con ambas extremas, con la extrema derecha a través de las reformas y con la extrema izquierda a través de la guerra y de la acción de los cuerpos de seguridad? Si fuera esto segundo, el proyecto político de Duarte no se distinguiría del norteamericano e implicaría de hecho la preferencia por una solución militar, la cual no puede llevar a una democratización real del país. Si así fuera, todo el proceso electoral no sería un paso adelante en la democratización, sino una fachada para la militarización. Porque, aunque se dieran pasos accidentales aparentemente democratizadores, los pasos esenciales serían todo lo contrario.

Para que el proceso electoral supusiera un paso adelante en la democratización que necesita el país habría que lograr resultados positivos en los cuatro puntos que antes mencionábamos: humanización y "civilización" de la guerra mientras no se termine con ella; favorecimiento a través del diálogo de un traspase de la lucha armada a la lucha política mediante la apertura asegurada y garantizada de espacios políticos y sociales; control absoluto de quienes dentro o fuera del aparato del Estado son los



Todo el proceso electoral sería una fachada para la militarización si Duarte insiste en terminar con ambos extremos, con la derecha por las reformas y con la izquierda por la guerra y los cuerpos de seguridad. Este es el proyecto norteamericano.

autores de la violación de los derechos humanos, reorientación popular de la economía. Ciertamente la acción del gobierno debe extenderse a otras cosas también, algunas de ellas de vital importancia, como es, ante todo, atender a una reactivación económica, sin la cual el pueblo salvadoreño no tiene posibilidad de sobrevivir. Pero no es ahora el momento de insistir en ellas, ni siquiera en lo que tienen de respuesta a un electorado que ha desechado la solución capitalista propugnada por ARENA y ha preferido la solución reformista propiciada por el PDC. Sí, en cambio, es el momento de insistir en esos puntos esenciales de la democratización que, si no se logran, demostrarán el ningún valor democrático real de las elecciones pasadas. El juicio no dependerá de logros parciales posibles o de fallos parciales probables, sino que dependerá de la totalidad donde esos logros o fallos se inscriban, totalidad que deberá juzgarse desde la democratización conseguida, entendida ésta como respuesta real a las necesidades materiales y políticas de las mayorías populares.

La responsabilidad de que esto se consiga no está tan sólo en manos del partido vencedor en las elecciones. La administración Reagan no le va a dar muchas facilidades para ello, porque

Todo tipo de encuestas da como resultado que la mayor parte de la población ni cree ni acepta la solución militar como la mejor, sino que piensa que el diálogo sería el medio más adecuado.

sus intereses de hegemonía dominante no se acomodan a las condiciones objetivas y subjetivas en que se encuentra el país. Pero si la Fuerza Armada por un lado y por otro los frentes revolucionarios se persuaden de que es necesario hacer concesiones históricas para encontrar un camino aceptable por todos de democratización real, incluso la miopía norteamericana podría ser corregida. Y en eso estriba la gran responsabilidad del ejército y de los frentes. Ganar la guerra no es ganar la paz y de lo que aquí se trata es de ganar la paz, esto es, conseguir una situación inicial y unas posibilidades de avance que permitan a la mayor parte de la población satisfacer sus necesidades básicas y ejercer sus derechos fundamentales, unos derechos que antes que políticos son sociales. Para ganar la paz no es preciso ganar la guerra basta con terminar con ella en términos aceptables, aceptables sobre todo para la mayoría del pueblo salvadoreño, pues, si para ella lo son, lo deberían ser también para el ejército y para los frentes, quienes no pueden arrogarse ser los representantes principales ni de la patria ni del pueblo. Por ello, la Fuerza Armada y los Frentes deben ir al diálogo abiertos a dar pasos sucesivos que no se vean frenados por orgullos corporativos o por exigencias dogmáticas.

Un triunfo electoral como el conseguido por el PDC, si estuviéramos en un país realmente democrático, parecería que debería ser más que suficiente para conseguir los fines pretendidos y los objetivos propuestos en la línea de la democratización. Pero nuestro país no es realmente democrático. Estas últimas elecciones pueden conducir a que lo sea un poco. Pero pueden conducir también a que lo sea tan sólo en apariencia, una apariencia que disimularía y justificaría engañosamente una situación no democrática, si es que no queremos confundir democracia con elecciones. Desear y buscar que se realice lo primero aunque sea paulatinamente y rechazar lo segundo es lo que cabe pedir a todos los salvadoreños y, desde luego, al gobierno que pretende representarlos.